

Mapa de riesgo de la violencia política en razón de género en el Proceso electoral 2017-2018 de Guanajuato¹

La identificación de los territorios donde la violencia electoral en razón de género pueden ser proclives a su ejercicio y distinguirla de la que es propia del juego político, se vuelve fundamental como una política de prevención y búsqueda del libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esta investigación es parte de un proyecto más amplio denominado “VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO” solicitado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y contempla, entre otros, un mapa de violencia electoral en razón de género. Un mapa de riesgos es una herramienta que se nutre de los sistemas de información descriptiva y relevante para identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y localizar los *topos* de daño potencial asociados a su ocurrencia. Un mapa de esta naturaleza proporciona la georreferenciación de los indicadores que desde nuestra selección teórica creemos que nos proporcionan el sentido de comprensión para el fenómeno. Nos proporciona una información integrada sobre los diferentes indicadores para sintetizar las zonas de mayores riesgos y facilita la delimitación de su estudio. El resultado de este estudio es un documento gráfico que permite las transposiciones de los indicadores por capas de información y con diferentes niveles de desagregación. Los datos que se integran en el mapa se obtuvieron a partir de los delitos de alto impacto, la violencia contra las mujeres y su relación con los Índices de Desarrollo Humano Municipal, y el Índice de Desigualdad de Género. Este primer informe permite observar las disimetrías entre diversas zonas del estado de Guanajuato desde la correlación entre los índices de desarrollo, el incremento de las tasas delictivas contra las mujeres y las estrategias electorales de Guanajuato en 2017-2018.

¹ Dra. Verónica Vázquez Piña. Profesora de asignatura de la Maestría de Comunicación Social y Política de la Universidad de La Salle Bajío. Email: veronicavazquezp@gmail.com
Dr. Carlos Ríos Llamas. Universidad de La Salle Bajío. Email: carlosrios@delasalle.edu.mx

El proceso electoral de México en 2018 fue el más grande de la historia ya que constituyó elecciones federales, 9 gubernaturas, 18 Congresos locales y 1,596 gobiernos municipales se disputaron. Además, el padrón electoral constó de 89.1 millones de electores. Pero tal vez lo más novedoso haya sido el logro de la paridad tanto vertical como horizontal, es decir, que el acceso de las mujeres en política aumentó considerablemente en todas estas elecciones, sin esta acción afirmativa es posible observar que tan sólo 5 mujeres han participados como candidatas a la Presidencia de la República de 1988-2012, y en este proceso una candidata se presentó como Candidata Independiente sin lograr terminar la contienda. Para darnos una idea de la representación política de las mujeres en la Cámara de Diputados es posible observar que aumentó de 11.8% en 1988 a 42.6% en la última legislatura de 2015-2018, mientras que en la Cámara de Senadores su crecimiento ha sido mucho menos lineal y progresivo, ya que en 1988 las mujeres lograron un 15.6% descendiendo su representación hasta 7.8 para el siguiente periodo y manteniéndose en un rango de 12.5 hasta 17.2 de 1994-2012, cuando para el último período ya se logra al menos una representación del 32.8 % (INE, 2017).

Todavía el hecho de ser mujer presupone que una mujer sea excepcional para llegar a ser presidenta o primera ministra, no es un hecho normalizado, ni para llegar a esa posición el camino está libre de violencia. Esto nos conduce a reconocer la tesis de Carol Pateman (1995) en la cual comprende al contrato social como un contrato sexual donde las relaciones de producción, poder y reconocimiento son atribuidas a los hombres mientras que la reproducción, los cuidados y la desigualdad en el acceso al poder son las esferas de destino para la subordinación de las mujeres.

El estudio de la violencia política en razón de género es un tema que ha retomado un gran interés en los últimos años. En 2012 podemos ubicar el primer esfuerzo público-político de este fenómeno cuando la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) definieron el acoso político y la violencia política incluyendo el daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducir a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley. Es hasta el 2017 que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará (MESECVI) presentó la Ley Modelo

Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres con la finalidad de servir como fundamento jurídico para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

En México el andamiaje institucional ha ido avanzando hasta que en el 2016 surge un Protocolo para atender la Violencia Política a raíz del aumento de los delitos contra las mujeres en la esfera política. Es posible afirmar que es un campo de estudio en plena creación, en Guanajuato existen pocos estudios y en ninguno hemos encontrado indicadores que nos permitan identificar los espacios públicos donde esta violencia puede ser más proclive a presentarse.

Nos hemos dado la tarea de observar el proceso electoral local 2017-2018 para comprender en qué otros espacios que no sean los habituales donde las candidatas realizan sus actividades personales y políticas (domicilios, trayectos cotidianos, casas de campaña, y sedes de partidos políticos) pueden considerarse de riesgo por medio de indicadores que creemos están relacionados con la violencia política contra las mujeres al comprender el fenómeno dentro de la rutinización de la violencia y la impunidad derivada de la falta del Estado de Derecho que impera en México, así como parte de una cultura patriarcal donde algunos contrincantes pueden reaccionar con el ejercicio de la violencia en razón de género ante la apertura de espacios para las mujeres antes dominados por los hombres y atribuidos para ellos.

Nuestro objetivo es determinar los territorios proclives a la manifestación de la violencia electoral en razón de género y distinguirla de la que es propia del juego político para la comprensión del fenómeno y el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Guanajuato.

Este trabajo forma parte de una investigación en proceso y más extensa, que busca comprender tanto las manifestaciones, momentos, y perpetradores que durante el proceso electoral 2017-2018 estuvieron presentes, pero esta publicación sólo hace referencia a la construcción del mapa de riesgo de Violencia Electoral en Razón de Género.

1. La teorización de la Violencia Política en Razón de Género

Es necesario remarcar que para muchas investigadoras la violencia es considerada como un fenómeno multidimensional y multicausal, no somos la excepción ya que seguimos esta perspectiva reflejada desde la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) donde la violencia se conceptualiza como un continuo de actos violentos y no sólo el daño físico. Estas acciones son parte de una semiótica de lo social que la teoría de género ha ido develando para explicar a partir de la posición social que ocupan hombres y mujeres desde que nacen, y del rol de género a través de los cuales ejercen sus posiciones de poder o de subordinación y que a su vez son estructurantes socioculturales y dan sentido a la violencia simbólica al jerarquizar las relaciones sociales y legitimar tanto a las violencias estructural como a la directa.

Desde la promulgación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en México se define a la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público”. La violencia tiene múltiples formas de ejercerse: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, simbólica y feminicida así como lugares o ámbitos.

Para María del Rosario Varela Zuñiga, “la violencia hacia la[s] mujer[es] no es un hecho aislado ni un problema individual, sino un problema social y una ofensa a la dignidad humana que se enraíza en la predominancia de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (2015, p. 150).

La hipótesis de los contextos políticos y electorales para la discriminación e impacto de la violencia.

Alanís (2017: 235) al tomar como referencia los estándares de la CIDH y del Comité de la CEDAW en su Recomendación General 19 y la Convención de Estambul de 2011, indica que para considerar un acto de violencia se basa en el género cuando:

- 1) La violencia se dirige a una mujer por ser mujer, y

2) La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente.

Si bien estos dos elementos básicos fundamentales, se debe también que considerar mínimamente tres elementos: el contexto, la intersección y los estereotipos. Por contexto se entiende las situaciones en las que resulta la evidente presencia de condiciones particulares que ponen en riesgo a las mujeres, como la pobreza, la inseguridad, el desempleo, un conflicto armado, el analfabetismo, condiciones relacionadas con el medio ambiente, e incluso la violencia (*ídem*: 237).

De una manera similar, Bardall (2015) “explica que las mujeres tienen vulnerabilidades particulares en contextos políticos y electorales, ya caracterizados por la inseguridad. Están más expuestas y son más vulnerables que los hombres políticos a experimentar situaciones discriminatorias” (Freidenberg, 2017:17).

La Hipótesis de la Violencia Política en Razón de Género (VPRG) como medida “disciplinar” para las mujeres

Krook y Restrepo Sanín en dos artículos de 2016 analizaron a la violencia contra las mujeres en política como un subconjunto de la violencia contra las mujeres a través de la revisión de la literatura académica sobre violencia contra las mujeres, violencia política y violencia electoral y definieron la violencia contra mujeres en política como

Conductas que están dirigidas específicamente contra las mujeres por ser mujeres, con el propósito de presionarlas para que renuncien como candidatas o como representantes electas a un cargo público. Estas acciones, aunque se dirigen a una mujer en particular están dirigidas contra todas las mujeres en un intento por preservar la política bajo el dominio masculino (Krook, 2017: 52). Con esta comprensión las autoras clasifican a este tipo de violencia además de manifestarse como física y psicológica busca disciplinar a todas las mujeres para preservar el orden histórico y “natural” de la política, es decir, llegar a su máxima potencia.

Sin embargo, Piscopo alerta sobre la conceptualización de cualquier hecho violento contra las mujeres como VPRG, ya que autoras como Krook y Restrepo (2016a y 2016b),

Kroop (2017) y Albaine (2017) “plantean que cualquier acto de violencia contra una mujer política es un acto de violencia política por razón de género” (Freidenberg, 2017: 18).

La hipótesis de la violencia política contra las mujeres como parte de un contexto social y cultural.

El trabajo de Janine Otalora Malassis establece un marco conceptual para discutir la violencia política de género como un fenómeno particular, aunque relacionado con los contextos sociopolíticos más amplios y explica como esta violencia es un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se trata de una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras, desde un determinado lugar y una posición política, frente a las relaciones de poder y las prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen. (Otalora, 2017:146, 148).

De igual manera, Piscopo expone una crítica a la conceptualización que hacen Krook y Restrepo Sanín como “una nueva forma de violencia vinculada al ámbito político y partidario (y, en consecuencia, como un delito electoral)” pero que a su examinación pasa por alto el contexto sociopolítico más amplio, corre el riesgo de empeorar la incapacidad del Estado para abordar la naturaleza de la violencia en América Latina (2017, p.76).

Para esta autora, este tipo de violencia se asienta sobre tres problemas sociopolíticos interrelacionados: 1. La inscripción de diversas formas de violencia en la vida cotidiana; 2. Los deficientes sistemas de justicias e ineficaces aparatos policiales que garantizan la impunidad de los agresores, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres y 3. Los continuos esfuerzos de las dirigencias partidarias para impedir que las mujeres accedan al poder político de manera efectiva, especialmente en el nivel local. Estas problemáticas revelan el lento proceso de resquebrajamiento del orden patriarcal donde al centrarse en el ámbito político, las activistas y académicas (Acobol, 2010 y 2013; Krook y Restrepo Sanín, 2016) de este fenómeno ignorar el escenario más amplio de violencia e impunidad (*idem*).

La hipótesis del backlash

Desde los primeros diagnósticos que visibilizaban los casos que se nombrarían como violencia política se ha manifestado que la razón de dichas agresiones es la constitución de un “otro” sin legitimidad para participar en los asuntos políticos. Al querer ser consideradas como ciudadanas de primera clase, se percibe una amenaza del grupo que ostenta el poder, en este caso, los varones, quienes no pueden considerarlo como un ejercicio democrático de inclusión o sufragio universal, sino como una invasión a su natural y legítima posición social. Por tanto, las definiciones de violencia política contra las mujeres proporcionadas tanto por las activistas como por la academia, coinciden en que su propósito es restringir, impedir o eliminar la participación de éstas en tanto que son mujeres, un grupo social “incapaz” de participar en política e “ilegítimo” para “ocupar” puestos naturalmente destinados para varones. El carácter simbólico de la agresión por considerarla como parte de un grupo sin legitimidad política es la distinción principal entre la violencia política general y la violencia en razón de género (Góngora, 2018: 2).

Desde la hipótesis del backlash Góngora, percibe que “las cuotas de género, primero, y después las normas de paridad política han producido un considerable aumento de mujeres en posiciones de poder político: iniciaron con posiciones de representación proporcional en las asambleas legislativas, después se incorporaron en candidaturas de mayoría relativa, enseguida en cargos por posiciones ejecutivas, hasta llegar a exigir las dos dimensiones de paridad política (vertical y horizontal) para ampliar la posibilidad de elección de las mujeres. Si consideramos el caso mexicano, las reformas comenzaron a mediados de los años noventa, pero la exigibilidad de éstas llegó hasta el año 2011 con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 12624: estamos hablando de siete años en los que también se presentó la reforma constitucional de paridad de género, y que hizo posible la incorporación de miles de mujeres a las filas de las candidaturas políticas. Así mismo, la historia misma de estas medidas electorales para la promoción de la participación política de las mujeres es una muestra de la resistencia de los partidos políticos, los cuales ideaban una “triquiñuela” diferente por cada medida implementada. En este sentido, las

observaciones nacionales y en los diferentes países de América Latina que han realizado los estudios, se puede observar una relación entre la aplicación de estas medidas y el aumento de participación de las mujeres y la manifestación de violencia política (*idem*).

De los estudios más referidos en la materia² y realizados por los organismos internacionales, principalmente la Organización de los Estados Americanos (OEA), han establecido la relación de la violencia política contra las mujeres con un aumento de la participación política en los cargos de representación política, derivado principalmente de la implementación de las acciones afirmativas o cuotas de género, o la inclusión del principio de paridad política en los ordenamientos legales de los Estados.

En esta investigación se define la violencia electoral en razón de género como el conjunto de discursos, prácticas u omisiones basados en supuestos culturales que consideran a las mujeres como inferiores e incapaces de desempeñarse en cargos públicos de elección popular, que producen menoscabo sexista, discriminación, desigualdad, amenazas o actos contra la integridad física (y a la vida), en su aspiración por contender por cargos de elección popular, durante la campaña electoral como candidatas y, una vez emitidos los resultados de la contienda, ya sea como vencedoras o perdedoras de los comicios.

Para comprender a la Violencia Política en Razón de Género a partir de la institucionalidad mexicana es necesario considerarla de la siguiente manera:

²Encontramos a Laura Albaine, 2014, “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad”, en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, no. 52, pp. 145-162; Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín, 2016, “Género y violencia política en América Latina. Conceptos, debates y soluciones”, en *Política y Gobierno*, vol. XXIII, no. 2, pp. 459-590; Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín, 2016, “Violencia contra las mujeres en política. En defensa del concepto”, en *Política y Gobierno*, vol. XXIII, no. 2, pp. 459-590; Jennifer M. Piscopo, 2016, “Capacidad estatal, justicia criminal y derechos políticos. Nueva mirada al debate sobre la violencia contra las mujeres en política”, en *Política y Gobierno*, vol. XXIII, no. 2, pp. 437-458; Laura Albaine, 2017, “Contra la violencia política de género en América Latina. Las oportunidades de acción”, 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Montevideo, 26 al 28 de julio del 2017; Rafael Elizondo, 2017, *Violencia política contra la mujer: una realidad en México*. México: Porrúa.

Tabla 1 elaborado bajo los lineamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2017). Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Destinatarias/os	Ámbitos o lugares de incidencia	Formas o tipos	Perpetradores/as: En grupo o individual	Medios	Tipo de responsabilidades
* Una o varias mujeres, en su calidad de votantes, aspirantes a un cargo de representación popular, precandidatas, candidatas, candidatas electas o en el ejercicio del cargo por el que fueron electas *Familiares o personas cercanas a la víctima *Un grupo de personas o la comunidad	* Política, económica, social, cultural, civil * Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal * En la comunidad, en un partido o institución política	*Física *Psicológica * Simbólica * Sexual *Patrimonial * Económica * Feminicida	*Integrantes de partidos políticos *Aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista *Servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales *Servidores(as) o autoridades de instituciones electorales *Representantes de medios de comunicación *Así como el Estado y sus agentes	* Periódicos, radio y televisión *A través de las tecnologías de la información *El ciberespacio	* Penales * Civiles * Administrativas * Electorales * Internacionales

Para la elaboración metodológica del Mapa de Riesgo de Violencia Política en Razón de Género, es necesario puntualizar que nos encontramos en el esfuerzo de obtener evidencia empírica para la hipótesis de Psicopo, donde la diferencia entre la violencia política y la violencia política en razón de género existe, es decir, que no todas las agresiones contra las mujeres son agresiones debidas a su hecho de ser mujer, si no obedecen a contextos más amplios de violencia e impunidad que permiten que estas manifestaciones se presenten, sin tener elementos de género a priori.

Si estos contextos de violencia multidimensional política y social, es decir, que se presentan tanto en los contextos públicos como privados, son la raíz del problema que tan solo se traslada al ámbito político entonces si estas manifestaciones están presentes en ciertos territorios, podríamos pensar que son un riesgo para las mujeres políticas, y en nuestro caso, precandidatas y candidatas y que existen contextos sociales, económicos y políticos de mayor riesgo para las mujeres.

2. Metodología para la construcción del Mapa de Riesgo de Violencia Electoral en Razón de Género.

La violencia política de género es conceptualizada por algunas autoras como la reacción en contra del incremento de la representación política y poder de las mujeres, está sustentada

por los patrones culturales que los estudios de género han visibilizado ampliamente sobre los roles, y estereotipos de género así como la comprensión de las esferas públicas como lugar privilegiado del poder de los hombres y la esfera privada como el ámbito de sumisión de las mujeres. Estos contextos socioculturales se pueden expresar con el Índice de Desigualdad de Género al buscar aproximarnos al acceso desigual que tienen los hombres y las mujeres no sólo a la salud, educación y economía sino también al empoderamiento de las mujeres por medio del acceso a cargos de representación legislativa.

Para comprender los territorios de riesgo que no sean los habituales donde las candidatas realizan sus actividades personales y políticas (domicilios, trayectos cotidianos, casas de campaña, y sedes de partidos políticos) es necesario poder distinguir la violencia que se ejerce contra las mujeres en razón de género de la que es propia del juego político, para ubicar en qué espacios geográficos pueden presentarse situaciones de conflicto y violencia.

Siguiendo la perspectiva de Salamanca (2006: 18) donde

La violencia, pues, además ocurrir, consta de un lugar y no puede ser sin él, en una relación de determinación mutua: así como la violencia requiere un *topos* para poder ser leída, el hecho violento determina de manera definitiva al lugar en el que ocurre.

Para tratar de localizar el *topos* como relación de determinación mutua, comprendemos que el contexto sociocultural más proclive a hechos violentos puede estar determinando la caracterización y las manifestaciones de la violencia. “Si bien la violencia no es sólo un hecho medible sino que además es un fenómeno de posibilidad. Que la violencia pueda ser, que sea una amenaza, por ejemplo, es en sí una manera de ocurrencia de la violencia, que se debate entre su latencia y su evidencia” (*idem*: 18).

Aceptamos como Salamanca que la violencia es un hecho probable pero fundamentalmente impredecible y caótico que se da en un lugar preciso y que tal vez haya condiciones que la faciliten por el contexto para realizar un mapa de riesgo.

La determinación de la geografía política y competitividad electoral, así como los contextos socioculturales particulares nos ayudan a la comprensión de esos lugares y posiciones políticas frente a las relaciones de poder y prácticas de dominación naturalizadas

en el ejercicio de la política, es por esto que estos mapas nos permiten una primera aproximación de análisis del fenómeno de la violencia política de género.

Alanís Figueroa (2017: 237) argumenta que existen contextos que “ponen en riesgo a las mujeres, como la pobreza, la inseguridad, el desempleo, un conflicto armado, el analfabetismo, condiciones relacionadas con el medio ambiente e incluso, la violencia”.

Bajo estos matices teóricos donde indican que hay que observar los contextos que ponen en riesgo a las mujeres, y teniendo en cuenta el modelo de desarrollo propuesto por el PNUD donde se insiste que el nivel local es el espacio más adecuado para promover procesos de beneficio social e incremento de capacidades y oportunidades para las personas es que

Para comprender los factores de riesgo partimos del supuesto que la gravedad y riesgo de las mujeres aspirantes y candidatas está vinculada con zonas caracterizadas por la presencia del crimen organizado, de un alto índice delictivo y crímenes contra las mujeres así como los contextos socioculturales de desarrollo y desigualdad de género.

Siguiendo la lógica que utiliza Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia para la conceptualización de Mapas y Factores de Riesgo Electoral (2018), adaptamos a nuestro enfoque teórico y conceptual sus definiciones. El Riesgo es entendido como amenazas y vulnerabilidades que se presentan contra las mujeres que hacen política en el proceso electoral. Las amenazas son los factores que por su naturaleza, confluyen para alterar la normalidad del proceso electoral, estos pueden ser sociales, económicos y/o políticos. Las vulnerabilidades son la capacidad que tienen las instituciones y actores del sistema político para resistir las amenazas y contribuir a su equilibrio democrático. Cultura machista, Cultura de participación política (electoral y no de ciudadanía activa).

Desde el enfoque del MOE, las variables de riesgo de violencia se conceptualizan a través de las manifestaciones de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos. En México, Salazar Vázquez (2018) de Etellekt Consultores construyen un Indicador de Violencia Política con 8 variables: asesinatos, amenazas e intimidaciones, heridos con armas de fuego, agresiones con armas de fuego con tentativa de homicidio que resultaron ilesos, atentados en contra de familiares, secuestros, asaltos con y sin violencia.

2.1 Definición y función del mapa de riesgo

Los mapas de riesgo son instrumentos informativos y dinámicos que mediante informaciones descriptivas e indicadores permite el análisis de una determinada zona y a su vez la programación de planes de intervención preventiva y la verificación de su eficacia, una vez realizados (citado en García, 1994: 443).

La realización del mapa de riesgos se compone de cuatro fases:

1. Fase cognoscitiva: conocer profundamente los factores de riesgos para programar intervenciones preventivas ajenas a cualquier improvisación.

2. Fase analítica: análisis de los conocimientos adquiridos en el paso anterior para fijar las prioridades de intervención.

3. Fase de intervención: aplicación sobre el terreno práctico de los planes de intervención programados

4. Fase de evaluación: verificación de los resultados de la intervención respecto a los objetivos programados. (García: 445)

2.2 Indicadores del Índice de Violencia Electoral en razón de género

Para la construcción del mapa de riesgos es necesario determinar los factores de riesgo a través de Indicadores para conformar el Índice de Violencia Electoral en razón de género.

Índice de Desarrollo Humano (IDH):

Este índice tiene como objetivo medir capacidades y libertades que tienen las personas para elegir entre formas de vida alternativas y está compuesto por tres dimensiones: 1) la posibilidad de gozar una vida larga y saludable; 2) las capacidades de adquirir conocimientos, 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. (UNPD, 2014).

Índice de Desigualdad de Género (IDG):

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El indicador muestra la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones (PNUD 2010). El IDG

tiene una lógica inversa a la del IDH, es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el panorama de desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno, las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias.² Con el IDG puede determinarse en cuánto y en qué dimensiones las mujeres presentan desventajas respecto de los hombres en términos de desarrollo igualitario. Lo anterior permite hacer sugerencias de política pública enfocada a cada uno de los tres aspectos que considera el IDG.

Índice de Competitividad Política:

Silvia Gómez Tagle (2006) utiliza el Índice de competencia ponderado para la elaboración de la geografía electoral. Este Índice se calcula al ponderar la diferencia entre los votos recibidos por el partido en primer lugar y el partido en el segundo:

$$1 - ((P1 - P2) / P1)$$

Esto se realizó casilla por casilla para tener la unidad de medida más pequeña que podamos georreferenciar para la determinación de territorios con alta competitividad electoral.

Para la comprensión de una extensión territorial Municipal, se realizó el mapeo de las tres elecciones anteriores, 2009, 2012 y 2015 dónde se examina los municipios se pueden observar los territorios de rentabilidad política, las alternancias políticas, y las alcaldesas.

Incidencia Delictiva Municipal:

Se utiliza la clasificación de delitos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, a excepción de los delitos referentes al patrimonio. La nueva metodología ofrece datos desagregados y la identificación de los bienes jurídicos afectados.

Tabla 2 Matriz de Bienes jurídicos afectados y delitos relacionados con los riesgos para las mujeres

Bienes jurídicos afectados	Delito
La vida y la	Homicidio/ Feminicidio
	Lesiones
	Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad

integridad corporal	
La libertad personal	Secuestro
	Tráfico de menores
	Otros delitos que atentan contra la libertad personal
La libertad y la seguridad sexual	Abuso sexual
	Acoso sexual
	Hostigamiento sexual
	Violación simple/ Violación equiparada
	Incesto
	Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual
La familia	Violencia familiar
	Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar
	Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
	Otros delitos contra la familia
La sociedad	Corrupción de menores
	Trata de personas
	Otros delitos contra la sociedad
Otros	Narcomenudeo
	Amenazas
	Allanamiento de morada
	Electorales

Los Delitos de Alto Impacto son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía.

En nuestro estudio, en particular, es necesario focalizarnos en los delitos contra las mujeres como son el Feminicidio, el abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como las violaciones. Estos delitos son la expresión de la cultura machista y misógina que comprende

a las mujeres como objetos al servicio de los hombres. El comprender el fenómeno de la violencia feminicida nos aboca a los tipos de violencia tanto física como simbólica que buscan disciplinar a las mujeres.

En efecto, el estudio de La Violencia Feminicida en México aproximaciones y tendencias 1985-2016 realizado por la SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres (2017), muestra una divergencia entre las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio para hombres y para mujeres (DFPH): la persistencia de la violencia contra las mujeres y su mayor resistencia al descenso, ya que se observa que en los periodos donde se ha dado una disminución en el número de defunciones totales –como entre 1985 y 1990, 1994 y 2007 y después de 2010-, mientras que se observa un aumento en el porcentaje de defunciones femeninas con presunción de homicidio lo que sugiere un comportamiento específico de la violencia contra las mujeres, con sus propios factores explicativos (SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres, 2017: 20).

Al analizar los datos de los asesinatos de mujeres, corrobora que tienen un comportamiento distinto a los hombres, justo porque una parte importante de ellos obedece al acto discriminatorio de género que precede a la agresión letal, por lo que es necesario considerarlos estadísticamente como fenómenos independientes. En el sentido de que las muertes violentas relacionadas con la violencia denominada social, particularmente con las muertes vinculadas con el crimen organizado se han agravado en el país a partir de 2007 (ídem. 21).

En el estudio de georreferenciación de los homicidios de mujeres a nivel municipal de 2001-2010 que realizó Valdivia (2012: 3) muestra dos efectos:

El **Efecto contaminación** es una proporción relevante de homicidios de mujeres empieza a observarse sobre los municipios colindantes. De igual manera, concluye que las tasas de crecimiento de los homicidios de mujeres siguen un patrón regional preocupante donde el crecimiento de homicidios en un municipio dado determina una aceleración en el crecimiento de homicidios en los municipios colindantes.

El **efecto de convergencia** que consiste en que los municipios con menores tasas de homicidios de mujeres están viendo crecer dichas tasas a ritmos mayores que las de los

municipios con mayores tasas, lo que significa que con el tiempo aquellos municipios tendrán tasas tan elevadas como éstos.

A partir de estos contextos sociales, económicos, políticos que buscamos constatar con el mapa de riesgo electoral en razón de género que, a mayor Índice de Desarrollo Humano, mayor delitos de alto impacto. A mayor competitividad electoral mayor probabilidad de violencia electoral en razón de género. A mayor incidencia de delitos contra las mujeres y mayor desigualdad de género es mayor la probabilidad de Violencia electoral en razón de Género.

3. Resultados

3.1 Participación Política de las mujeres en Guanajuato

Es necesario estudiar las tres elecciones anteriores (2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018) para obtener un panorama sobre la obtención de puestos de representación política en las presidencias municipales por mujeres y el nivel de alternancia que existe en un Estado con un fuerte arraigo hacia el PAN que a partir de la transición a la democracia pudo consolidarse en la Gubernatura desde 1991 hasta la actualidad. Nunca ha habido una gobernadora, y en contadas ocasiones mujeres han participado en contiendas electorales de este nivel, como en 1995 Martha Lucía Mícher Camarena y ahora en 2018 por Nueva Alianza María Bertha Solórzano Lujano

Con la nueva reforma que obliga a la paridad para el próximo trienio habrá 13 mujeres al frente de las presidencias municipales, si bien la paridad en el Congreso local se había alcanzado desde las elecciones pasadas de 2012, este es un gran avance, además de la configuración de los partidos políticos donde la izquierda va tomando fuerza desplazando o conteniendo con el PRI por el segundo lugar.

¿En qué municipios postularon a mujeres para encabezar las presidencias municipales? ¿Estos municipios obedecen a algún patrón económico, social, o político? ¿Cuáles son los municipios que van a gobernar las mujeres?

Tras la reforma Constitucional de 2014 donde la paridad horizontal y vertical es obligada, y con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que obliga a los partidos políticos a postular de manera equitativa a las mujeres tanto en lugares de alta, moderada y baja

competencia electoral³ como principio afirmativo. ¿Es posible que a pesar de estos principios de paridad lo partidos busquen colocar las candidaturas de las mujeres en territorios que no sean considerados de alta rentabilidad política?

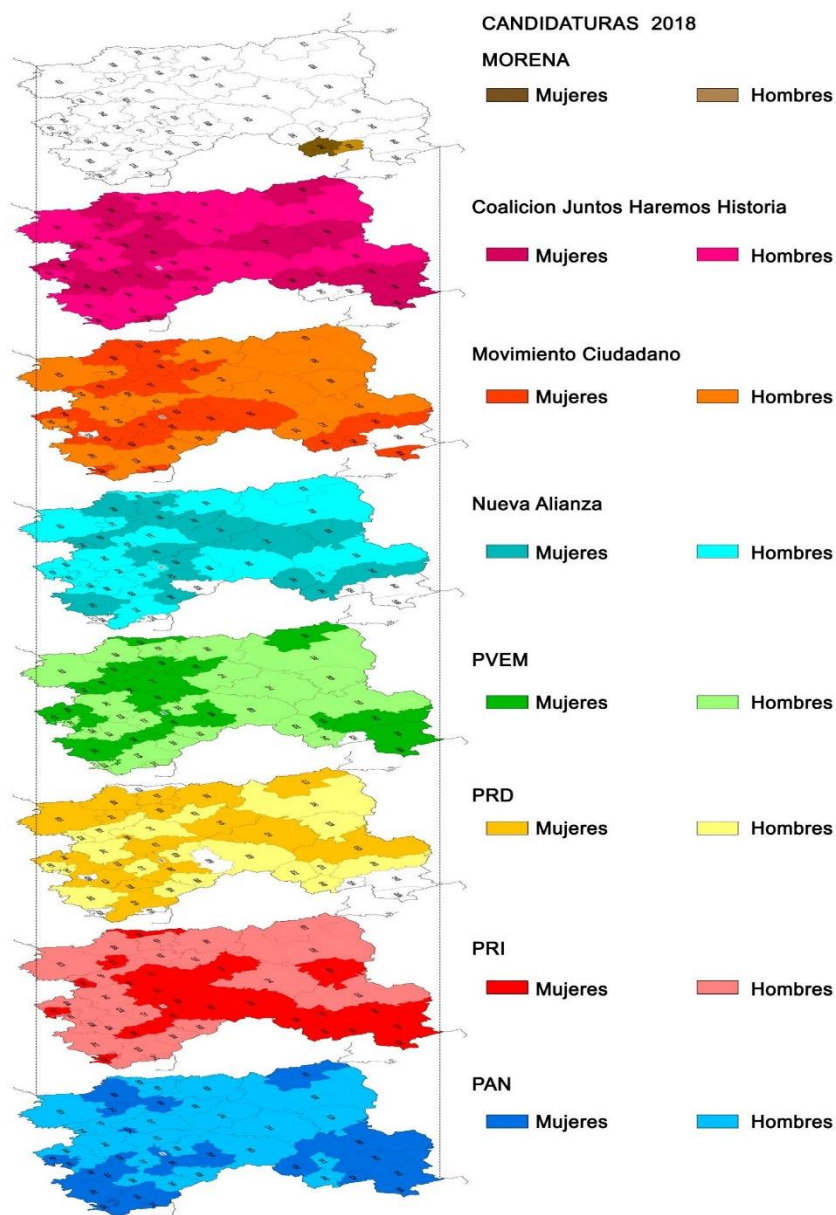


Ilustración 1 Candidaturas por sexo Proceso Electoral 2018

³ El acuerdo del INE marca que cada partido tiene que ordenar los municipios por votación obtenida para clasificarlos en bloques de alta, moderada y baja votación y así seleccionar hombres y mujeres equitativamente en cada bloque. De igual manera, se argumentó que el criterio que se privilegiaría sería el de mayor beneficio para las mujeres como principio de la acción afirmativa.

Se puede observar que el PAN sólo concede del corredor industrial el municipio de Celaya, hay que subrayar que ahí la contienda fue mayoritariamente entre mujeres. El otro aspecto relevante es que el noreste del Estado, donde se encuentran los municipios con bajo IDH son priorizados para designar a las mujeres como el sureste. Moroleón, municipio que denota la mayor contradicción entre IDH alto y mayor desigualdad entre hombres y mujeres fue designado para que una candidata lo contendiera.

Con respecto al PRI es posible observar que la apuesta al corredor industrial está encabezada por mujeres tanto en Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya y hasta San Miguel de Allende, pero también toda la región noreste con Victoria, Xichú, Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca, Doctor Mora, San José Iturbide. Igualmente, en Moroleón se designó a una mujer para la contienda. De las once presidencias municipales que gana el PRI, sólo Pueblo Nuevo está encabezado por una mujer.

Mientras para la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH compuesta por Morena, PT y PES) es posible observar la misma constante, el noreste está destinado para la contienda entre mujeres, y al igual que el PRI, deja algunos municipios del Corredor Industrial para la disputa electoral entre mujeres, estos son: Irapuato, Salamanca, Celaya. De las cinco presidencias municipales que gana dos ganaron las mujeres en Salamanca y San José Iturbide. Apaseo el Alto esta en contienda un candidato Guadalupe Remedios... que fue asesinado y su mujer será quien gobierne.

Tanto el PRD como el PVEM ganan dos presidencias municipales pero las dos encabezadas por hombres, es el único partido que postula a una mujer para contender por el municipio de León. Mientras NA gana una presidencia municipal, pero estará presidida por un hombre.

3.2 Índice de Desarrollo Humano (IDH):

En cuanto al IDH se observa que la capital política, Guanajuato y Celaya son los municipios con mejores puntajes seguidos de aquellos municipios del corredor industrial como León, Irapuato, Salamanca y como fenómeno de vecindad podemos observar a Villagrán y hay que destacar a Moroleón. San José Iturbide, Uriangato, Cortazar. Mientras que los municipios

con puntajes menores están localizados al noreste y son Xichú y Atarjea y más hacia el noroeste encontramos a San Diego de la Unión.

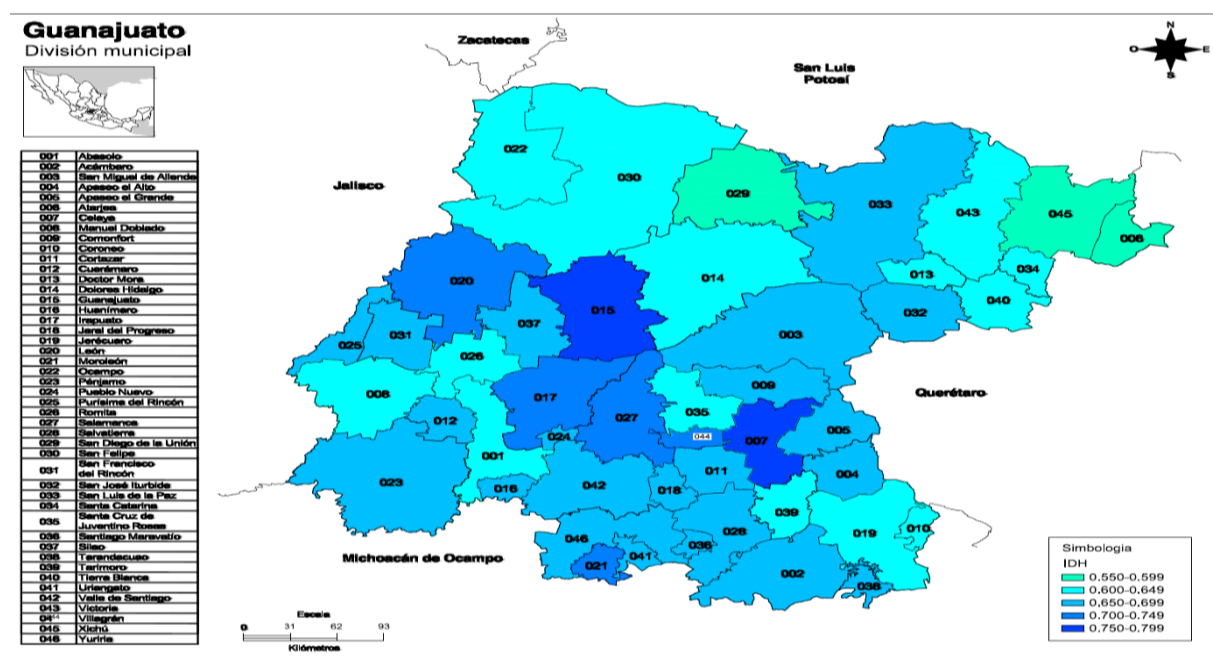


Ilustración 2 IDH

3.3 Índice de Desigualdad de Género (IDG):

En cuanto al IDG lo que se puede observar es que Moroleón es el que denota mayor desigualdad, y los municipios donde el IDH es más bajo la desigualdad no es tan alta, es decir, la afectación entre hombres y mujeres disminuye la brecha, son afectados por igual en el acceso a la educación, a la salud y a la economía. En sociedades democráticas estaríamos esperando buenos IDH con bajos IDG aspecto que parece estar lejos de la realidad de Guanajuato.

3.4 Índice de Competitividad Política:

En este mapa es posible apreciar los territorios que son clasificados con conflictos políticos por el órgano electoral. A diferencia de la incidencia delictiva, es posible observar que los municipios orientados al noreste del Estado son los que denotan esta problemática, principalmente San Luis de la Paz, Xichú, Tierra Blanca, que son municipios con bajos IDH. Pero igualmente, es posible observar algunos puntos distribuidos por el Estado, en Apaseo el Grande, Moroleón, León, Guanajuato, Comonfort entre otros.

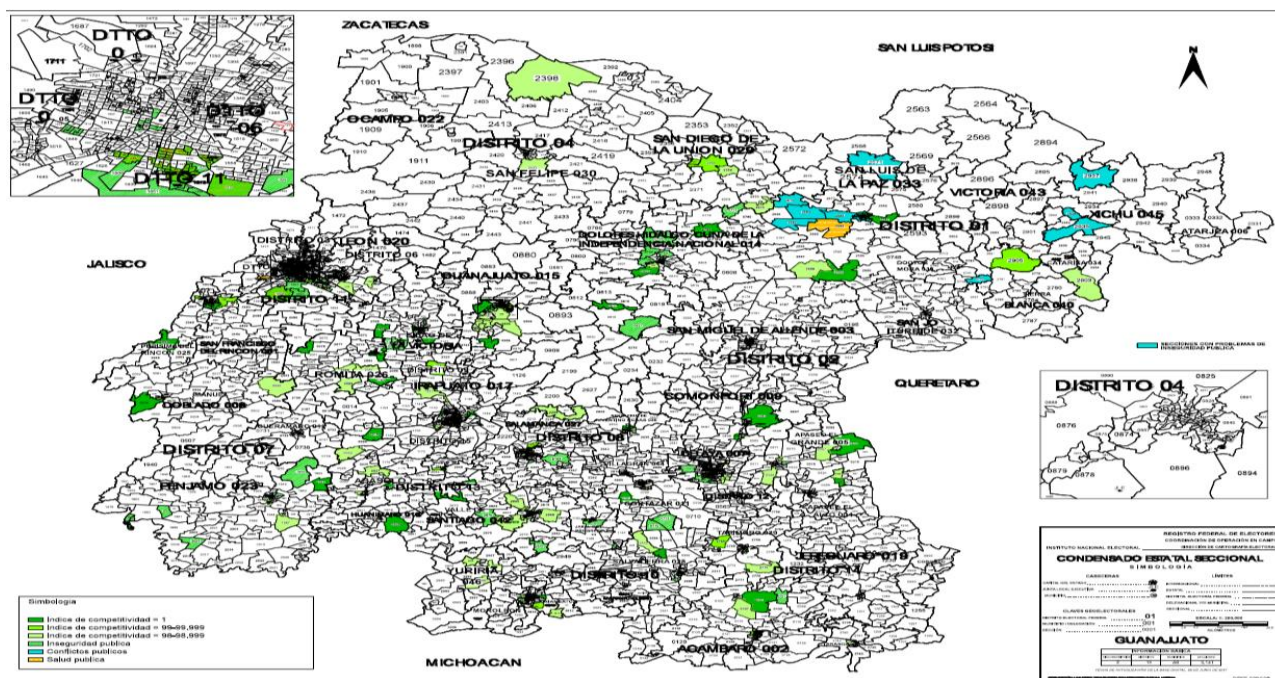


Ilustración 3 Índice de competitividad, y problemáticas seguridad, salud y conflicto político

3.5 Incidencia Delictiva Municipal

3.5.1 Femicidio

Guanajuato como entidad federativa en 2016 reportó 121 feminicidios correspondiendo a una tasa (por 100,000 mujeres) de 4.0 y ubicándose por debajo del total nacional que fue de 4.4 y como la doceava entidad federativa con mayor tasa de feminicidios.

En el análisis de los diez principales municipios que presentan tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio por 100,000 mujeres, de 2011 a 2013, no aparecen ningún municipio de Guanajuato, en 2014 León, se posiciona en el número 9 con 23 DFPH y una tasa de 2.96. En 2015 presenta 25 DFPH con una tasa de 3.19 y se ubica en el lugar 10. Para 2016 no figura entre los 10 municipios con altas tasas de feminicidio (SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres, 2017:58). Si bien es un problema nacional, y el gobierno a buscado implementar estrategias que erradiquen la violencia contra las mujeres es un hecho que se sigue presentando con una tasa elevada y sostenida.

León (+100) presenta el mayor número de feminicidios, seguido por Irapuato (81-90), Guanajuato y Celaya (61-70). En el siguiente rango esta Salamanca (41.50), Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Por el contrario, el Noreste del Estado región en situación

de pobreza y con los IDH más bajos muestran cero feminicidios al igual que Tarimoro y Coroneo.

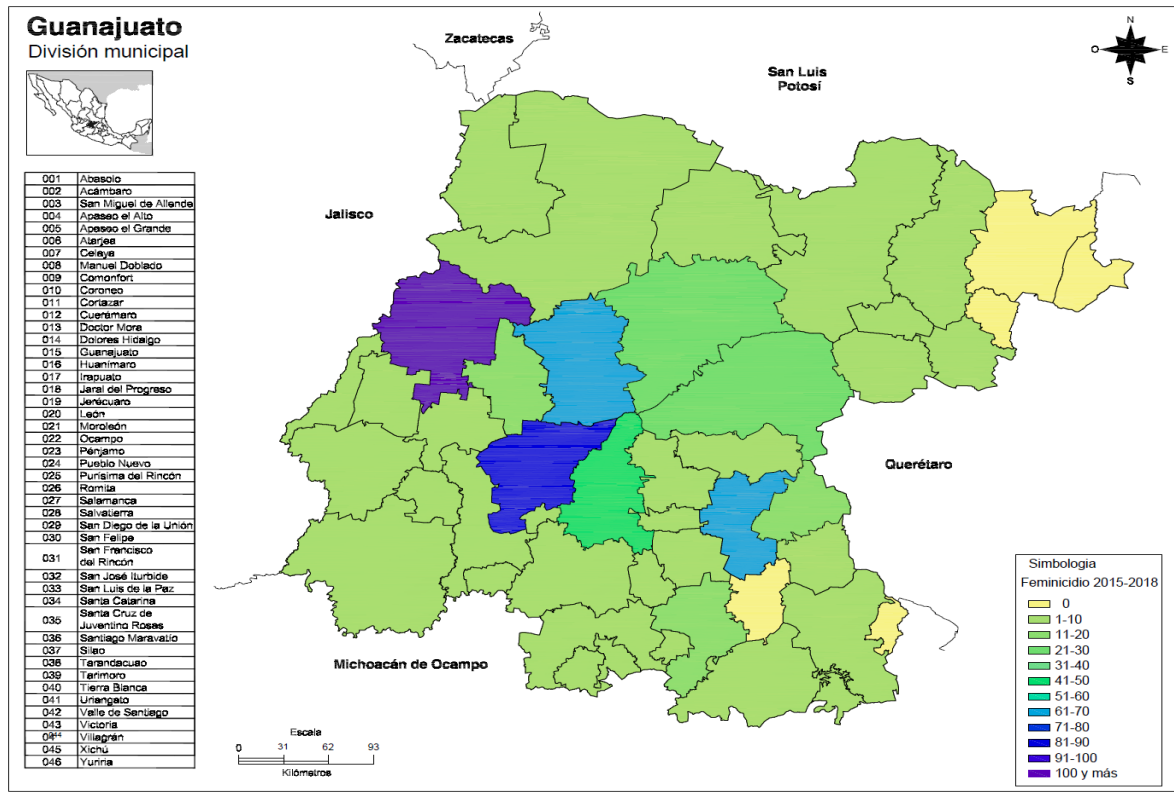


Ilustración 4 Feminicidio 2015-2018

3.5.2 Violación

Se observa que los municipios con mayor número de denuncias son León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Salamanca, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz.

Hay una marcada diferencia entre el mapa de violaciones al de abuso, mientras en el mapa de violaciones había muchos municipios sin incidencias, en el de abuso solo Atarjea aparece sin incidencias. La distribución indica que los municipios del corredor industrial como León e Irapuato son los que más presentan este delito seguido de Celaya, en el siguiente rango están Guanajuato y Salamanca, después Silao para seguirse con Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Salvatierra y Valle de Santiago.

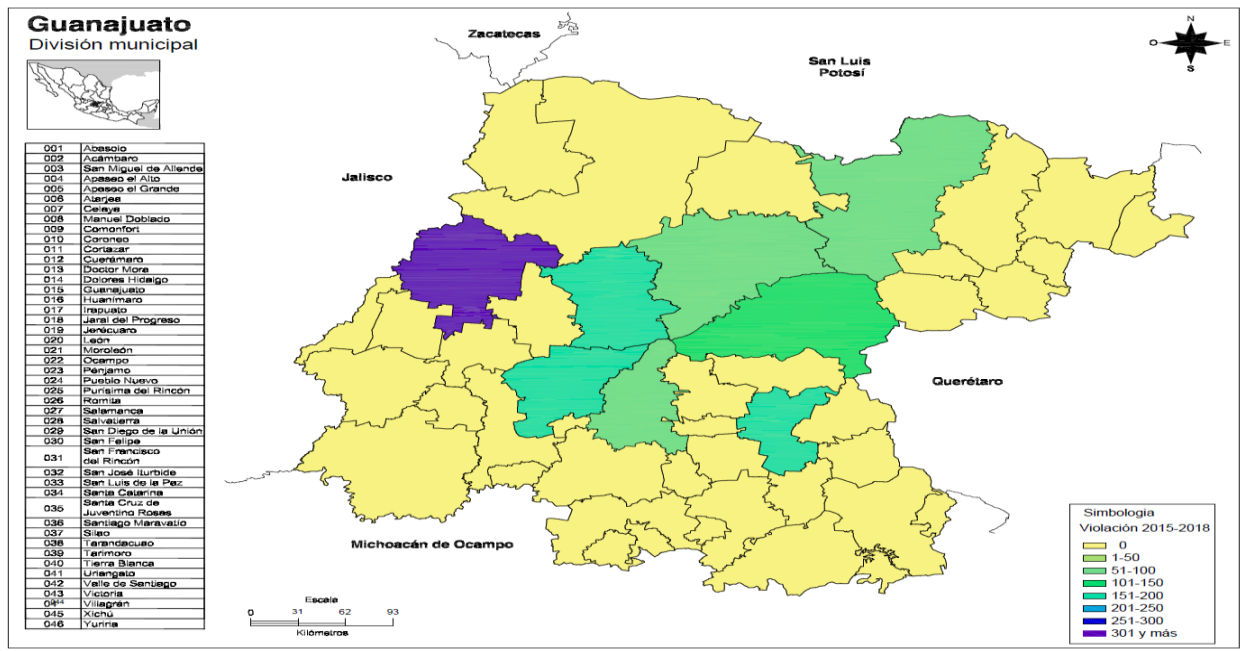


Ilustración 5 Violación 2015-2018

3.5.3 Acoso Sexual

En este delito, encontramos la parte noreste sin incidencias así como Coroneo y Tarimoro. Sigue encabezando la lista León, Irapuato, seguidos de Guanajuato y Celaya, después Salamanca. En el siguiente rango están Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende.

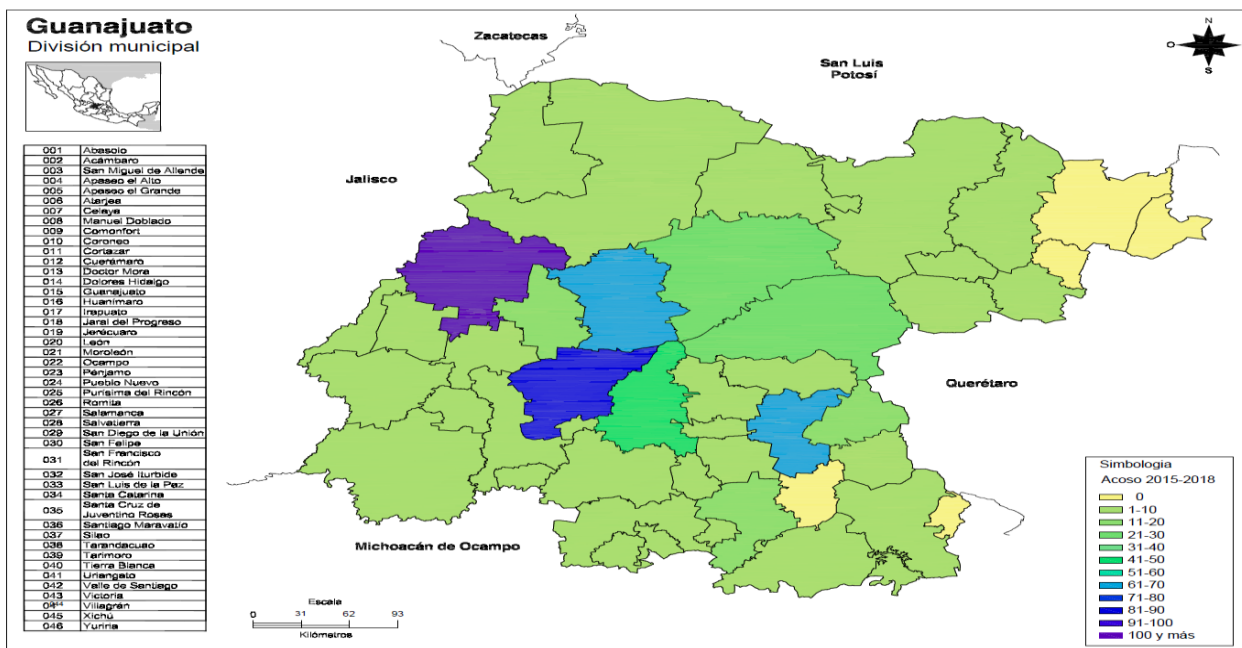


Ilustración 6 Acoso Sexual 2015-2018

Estos resultados nos permiten, por un lado, comprender tanto las lógicas políticas de la competencia electoral y sus conflictos territoriales, así como los principales problemas sociales como inseguridad, problemas relacionados con la salud, como los delitos sexuales que afectan a las mujeres.

Si bien las medidas normativas y afirmativas permiten el acceso a las mujeres a la representación política, sin embargo, ni es aún paritario y menos podríamos decir que se encuentran en igualdad de circunstancias para gobernar los municipios con mayores ingresos, población, y desarrollo, por el contrario las mujeres ganaron como era de esperarse por su asignación al noreste del estado que como sabemos son los que tienen más bajo IDH, los únicos municipios del corredor industrial y por ende, mayor IDH son Salamanca y Celaya.

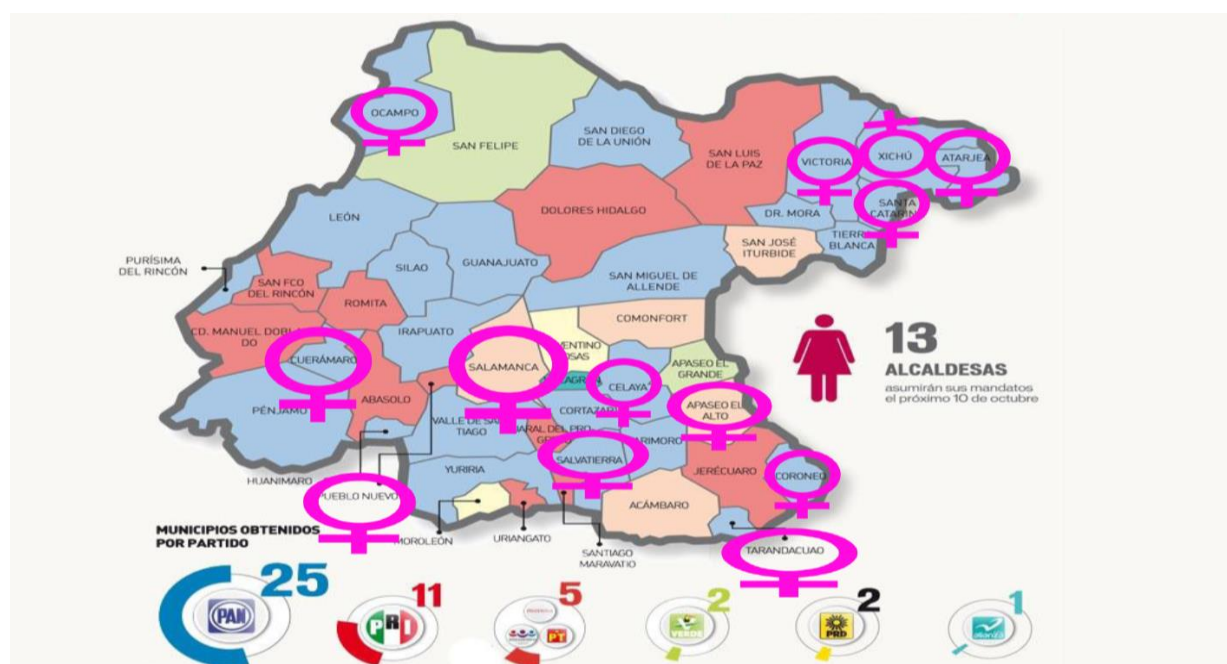


Ilustración 7 Mujeres electas elaborado con imagen del Periódico Correo

Es necesario comentar el caso de Apaseo el Alto, ya que si bien ganó una mujer, esta es la esposa del candidato de Morena asesinado con arma de fuego en mayo pasado cuando realizaba actividades de campaña. De hecho, esta localidad está ubicada en el llamado Triángulo Dorado de los huachicoleros, entre Celaya, Salamanca e Irapuato (Ureste, 2018).

Conclusiones

El proceso electoral 2017-2018 ha sido el más grande de la historia mexicana y el más violento, porque se han tenido elecciones concurrentes en 30 entidades federativas. Según Etellekt en su Séptimo Informe de Violencia Política en México hubo un total de asesinados de 523 entre políticos y funcionarios, de los cuales 371 eran funcionarios y 152 políticos, 20 durante las precampañas y 28 estaban en campañas electorales. De esos 152 asesinados, 133 eran hombres y 19 mujeres (Telesur, 2018).

Comprendemos que la violencia electoral contra las mujeres y en razón de género es multicausal y multidimensional, si bien en este estudio se busca en primer lugar georreferenciar los territorios que pueden denotar efectos de contaminación y de convergencia, conociendo en primer lugar cuáles son territorios que podemos catalogar como violentos contra las mujeres y a raíz de esto pensar que pudieran utilizarse para atentar contra las mujeres políticas.

De los hallazgos que encontramos es que todos los partidos políticos prefieren posicionar a las mujeres a contender en las presidencias municipales de la zona noreste del Estado, donde los desafíos son grandes debido a las características de pobreza y exclusión que vive la población. Mientras el corredor industrial es priorizado por el partido hegemónico de la región para ser encabezado por hombres y en los otros partidos políticos competitivos varía denota que el PRI apuesta en esos territorios posicionar a mujeres. El único municipio de este corredor en dónde contendieron mayoritariamente mujeres fue Celaya y un candidato independiente y es dónde los delitos de alto impacto y la violencia social son muy altos. El 6 de julio en conferencia de prensa todas las candidatas y el candidato denunciaron un mega fraude ya que en el 70% de casillas existen irregularidades según el periódico Correo.

Es posible observar que el principio de paridad aumenta el acceso de las mujeres a las presidencias municipales notablemente de dos a once, como ya se había visto también a nivel de Congreso local en las pasadas elecciones y que garantiza este principio a nivel de Congreso local gracias a las acciones afirmativas, pero al no ser obligatorio para las gubernaturas de los Estados ni en los gabinetes de estos, se puede observar que ahí donde no hay obligatoriedad de acceso de las mujeres a puestos de decisión política no hay mujeres desempeñándose a esos niveles.

Si bien las políticas públicas de acceso a puestos de representación llevan 25 años en México y han sido efectivas a partir de su obligatoriedad, lo que ha permitido que las mujeres ocupen cada vez más espacios tanto en la Cámara de diputados y de Senadores, para que en estas elecciones la paridad se asienta claramente.

En cuanto a los esfuerzos para erradicar la violencia político electoral, apenas comienzan con medidas e instrumentos jurídicos, pero la cultura machista aún prevalece así como el contexto de violencia social está en uno de sus puntos más altos de manifestación, lo que torna difícil pensar que en Guanajuato y México podremos acercarnos a una democracia sustancial dónde los conflictos se resuelvan por la vía pacífica y a través del consenso. Sin embargo, estos avances de acceso de las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos pueden alimentar y normalizar el hecho de que las mujeres pueden gobernar.

En cuanto a los delitos sexuales, nos deja mucho que estudiar pues en las regiones de más pobreza y menor población encontramos menor incidencia, sin saber si es por falta de denuncia o por inexistencia de delitos. Creemos que las bases de datos que a partir de enero de 2018 ya vienen desagregadas por sexo y edad, serán de gran ayuda para estudios como este, sin embargo, aún se percibe que la nueva metodología que implican las reformas en derechos humanos y con perspectiva de género están en vías de institucionalización.

Este mapa de riesgo de Violencia Electoral en Razón de Género de Guanajuato pudo identificar el *topos* de la violencia social donde las candidatas a puestos de elección podían correr más riesgos. Ahora es tiempo de entrar en la fase de evaluación y reunir información que nos permita valorar estos territorios en razón de las violencias que vivieron las candidatas para identificar las violencias electorales en razón de género y si éstas tienen relación con la violencia social identificada.

En cualquier democracia que se viva violencia, se inhibe la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Además de las violencias que sufren las candidatas dentro de los partidos políticos y en la campaña política, y las resistencias por parte de algunas personas al acceso de las mujeres a la esfera política, es necesario sustentar la práctica política en una ética feminista que permita a la sociedad transformarse y permear con lógicas civilizatorias y a través del consenso encontrar las vías de solución a los

conflictos, esto será posible sólo a través de un Estado de derecho que combata la impunidad y que vele por la participación de las mujeres como seres libre e iguales así como indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad.

Referencias Bibliográficas

Alanís Figueroa, María del Carmen (2017) “Violencia política hacia las mujeres. Respuesta del Estado ante la falta de una ley en México”. En Freidenberg Flavia y Del Valle Pérez Gabriela (eds). *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

García Gómez M. (1994) Los mapas de riesgos. Concepto y metodología para su elaboración. Revista *Sanidad e Higiene Publica*. N.4 Julio Agosto, Madrid.

Góngora, Vanessa (2018) Debates teóricos sobre violencia política contra las mujeres; teoría del blackash y análisis del capital sociopolítico de las mujeres en política. Mimeo.

INE (2017) #Mujeres en el Legislativo: nivel federal y estatal. Año 1, 01, mayo 2017. <https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Pol%C3%ADticas-Bolet%C3%ADn-01.pdf> (Consultado 27-8-2018)

Krook, Mona Lena (2017) “¿Qué es la violencia Política? El concepto desde la perspectiva de la teoría y la práctica”. En Freidenberg Flavia y Del Valle Pérez Gabriela (eds). *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México, México.

MOE (2018) *Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Elecciones nacionales. Colombia 2018*. Arte Litográfico Ltda: Colombia.

Piscopo, J. (2017) “Los riesgos de sobrelegislar. Reflexiones acerca de las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres que hacen política en América Latina”. En Freidenberg Flavia y Del Valle Pérez Gabriela (eds). *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México,

Freidenberg Flavia (2017) La Violencia Política hacia las mujeres: el problema, los debates y las propuestas para América Latina. En Freidenberg Flavia y Del Valle Pérez Gabriela

(eds). *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

PNUD (2014). *Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología*. México

ONU Mujeres, INMUJERES (2015). *Los Derechos Políticos de las Mujeres y cómo defenderlos*. Cuaderno de trabajo. México.

ONU Mujeres. *Un poco de historia*. <http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history>. (Consultado 16-7-2018)

Otalora Malassis, Janine M. (2017). “Participación y violencia política contra las mujeres en América Latina: una evolución de marcos y prácticas”. En Freidenberg Flavia y Del Valle Pérez Gabriela (eds). *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Pateman, Carole, (1995). *El Contrato Sexual*. México: Antropos y Universidad Autónoma Metropolitana. <https://jcguanche.files.wordpress.com/2014/01/131498859-carole-pateman-el-contrato-sexual-1995.pdf> (Consultado 16-7-2018)

Salazar Vázquez, R. Curzio, L y Ortíz V (2018). *Incursionado. Violencia Política en México*. http://canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_z63xh0z/Incursionando._Violencia_politica_en_Mexico (Consultado 27-8-2018)

SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres (2017). *La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016*. México.

Telesur, (2018). Registran 523 asesinatos durante proceso electoral en México. Consultado en <https://www.telesurtv.net/news/mexico-candidatos-asesinados-proceso-electoral-20180710-0032.html> (Consultado 18-7-2018)

Valdivia, M. Tras la Evidencia de la violencia contra las mujeres: un análisis de los homicidios. En SEGOB, CONAVIM, UNAM (2012). *Estudio Nacional sobre la fuentes,*

orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las Mujeres. (2010). Tomo I, Volumen I. México: INMUJERES.

Ureste, M (2018). ¿Por qué lo mataron? La historia de José Remedios, candidato de Morena asesinado en Guanajuato. *Animal Político*. 14 de mayo. <https://www.animalpolitico.com/2018/05/candidato-morena-asesinado-huachicol/>
(Consultado 27-8-2018)

Imagen: Vázquez, L. (2018). Gana PAN 26 municipios, 10 el PRI, PVEM 5 y PRD 4. Periódico Correo, 9, junio. <https://periodicocorreio.com.mx/domina-pan-alcaldias-en-elecciones/> (Consultado 27-8-2018)